



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2.024)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Apelación Auto: 05001 31 03 006 2022 00401 01

Proceso: Declarativo – Responsabilidad Civil Extracontractual.
Demandante: ISABEL CRISTINA MONTOYA ORTIZ (C.C. 43'629.999).
Demandada: TAX ALIANZA S.A.S. (NIT 811.031.665-2).
Extracto: Confirma decisión de primera instancia.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve la apelación interpuesta por la parte demandante, contra el auto proferido en audiencia realizada el diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2.024), por el JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

ANTECEDENTES

ISABEL CRISTINA MONTOYA ORTIZ, en nombre propio y para la sucesión LUZ ESTELLA ORTIZ DE MONTOYA, demandó a TAX ALIANZA S.A.S., pretendiendo se declare a esta civil y extracontractualmente responsable del accidente de tránsito ocurrido el 6 de noviembre de 2.021, en el que falleció la señora ORTIZ DE MONTOYA; en consecuencia, condenarla al pago de los perjuicios ocasionados y sufridos¹.

¹ Demanda, subsanación y reforma. Archivos 02, 04 y 13 cuaderno principal.

TAX ALIANZA S.A.S. contestó y llamó en garantía a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., y a RUBÉN DARÍO OSORIO OSORIO, quienes también replicaron a la demanda².

En audiencia del 17 de enero hogao se agotó la conciliación y la fijación del litigio, procediéndose al decreto de pruebas donde respecto a la documental deprecada por la actora se negó la denominada “...Cálculo de los perjuicios realizado por el suscrito...” (ver acta audiencia, archivo 34), argumentándose que lo realizado por el apoderado por activa, es un cálculo matemático que no constituye medio para acreditar lo informado en el juramento estimatorio³.

Frente a lo anterior la demandante presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, argumentando que con tal documento explica el monto relacionado en el juramento estimatorio exigido en el artículo 206 del C. G. del P., aunado que es un requisito formal, sin que sea necesario que la estimación la efectúe perito u otra persona especializada, pues de considerarse así se estaría afectando el derecho de acceso a la administración de justicia⁴.

En el traslado la demandada expresó que lo pedido es improcedente, pues el artículo 206 procesal civil refiere a una “*manifestación razonada de los perjuicios*”, sin que la liquidación de perjuicios efectuada por la misma parte sea prueba⁵.

El *a quo* decidió no reponer; aduciendo en primer lugar, que la definición sobre pruebas no constituye negación de acceso a la

² Tales contestaciones constan en los aarchivos 20, 22 y 24 ídem.

³ Minutos 15:30 a 16:20 del archivo 32 en el cuaderno principal.

⁴ Minutos 1:06:10 a 1:11:20 de igual archivo.

⁵ Minutos 1:12:45 a 1:13:50 del mismo archivo.

administración de justicia, ya que tiene la facultad de pronunciarse bajo los criterios de idoneidad, necesidad o pertinencia.

Indicó que el artículo 206 procesal civil dispone que cuando se reclame un monto económico, en la demanda debe presentarse la tasación o estimación razonada de los perjuicios, para lo que puede hacerse cálculos dentro del acápite específico -juramento estimatorio-, sin que sea necesaria la liquidación separada, de ahí que no sea procedente tener lo arrimado como un medio de prueba documental independiente para acreditar los perjuicios reclamados, y si bien no existe tarifa legal, la demostración del daño deviene por otras rutas probatorias⁶.

Subsidiariamente concedió la alzada, donde contando el punto en debate con la gracia de la apelación, la misma se resuelve previas:

CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 320 del C. G. del P., el recurso de apelación tiene por objeto que se examine la cuestión decidida en primera instancia, con el fin de revocarla o reformarla.

Del artículo 164 del C. G. del P., se tiene que *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.”*, donde con tales elementos se verifican las afirmaciones que soportan las pretensiones y excepciones, además, se fundamenta la decisión final, pruebas que han de aportarse en la respectiva oportunidad (artículo 173 procesal civil).

⁶ Minutos 1:14:40 a 1:26:10 ídem.

El *a quo* negó tener como prueba la denominada “*LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS*”⁷, misma que se arrimó con la demanda y su reforma, indicándose como “*Cálculo de los perjuicios realizado por el suscrito*”, en el que se consignaron las operaciones matemáticas de las que se dijo soportan el monto de los perjuicios reclamados, escrito elaborado por el apoderado de la demandante, pues así lo afirmó, aunque carece de rúbrica.

En relación a la incorporación de un medio de prueba que acredite la estimación razonada que se hace de conformidad con el artículo 206 del C. G. del P., la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, indicó:

“5.1. El artículo 206 del Código General del Proceso establece, que «**Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación**» (resalta la Sala).

“5.2. Así las cosas, no cabe duda para la Corte que el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago, Putumayo, desatendió que la disposición legal en comento establece, sin lugar a equívocos, que el juramento estimatorio de los frutos civiles es plena prueba, siempre y cuando su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del respectivo traslado, refutación que, además, deberá cuestionar razonadamente y específicamente la inexactitud que se le atribuya a la tasación; de allí que, sea innecesario que con el escrito de la demanda se allegue la demostración del monto por dicho concepto.

“5.3. De manera que, contrario a lo considerado por el estrado judicial querellado, en el presente caso no resultaba indispensable la aportación con el libelo inicial de un medio de convicción que soportara la estimación jurada de los frutos civiles pretendidos por los demandantes, en atención a que «se permite que la parte estime de manera razonada la cuantía de los perjuicios sufridos, bajo la gravedad del juramento, y **se reconoce a esta estimación como un medio de prueba que, de no ser objetada, también de manera razonada, o de no mediar una notoria injusticia, ilegalidad o sospecha de fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una sentencia de condena. Esto quiere decir que basta con la palabra de una persona, dada bajo juramento, para poder tener por probada tanto la existencia de un daño como su cuantía**» (Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013).”. Negrilla, subraya y comillas en el texto original. STC2264-2020.

⁷ Folios 29-31 archivo 13 cuaderno de la primera instancia.

Entonces, si la tasación juramentada en sí misma “*hará prueba*”, siendo esta una de sus funciones procesales⁸, el debate probatorio sobre el particular solo se abrirá en el evento que fuera objeto, donde ahí sí entrarán otros medios probatorios por parte del interesado, con el fin de obtener el efecto jurídico perseguido.

En esos términos, ante la objeción por parte de la demandada y los llamados en garantía, esto lo que ocasiona es un debate para la demostración del perjuicio que dice sufrió la demandante, para cuyo propósito no es suficiente una operación matemática o financiera realizada por la propia parte, sino que se requiere un medio de prueba útil para la formación del convencimiento del Juez.

En esa misma línea, tampoco se ajusta al ordenamiento pretender que se tenga como prueba documental un escrito que riñe con el principio consistente en que “*a nadie le es permitido constituir sus propias pruebas*”, como lo dijo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 18 septiembre de 2013 (Exp. 73001-31-03-003-2005-00211-01).

Tampoco puede decirse que el asunto sea de “*tarifa legal*”, concepto contrario a nuestro régimen de libertad probatoria, sino, que el abogado recurrente no puede fungir como perito dentro del mismo asunto, dado el papel que uno y otro tiene, entre los que están, la imparcialidad.

En esos términos, se confirmará la decisión apelada, debiéndose destacar que dentro de la dirección procesal el funcionario judicial

⁸ Sobre el punto, la jurisprudencia ha indicado: “*Así, del panorama expuesto, puede colegirse con facilidad que la naturaleza del juramento estimatorio radica, entre otras, en i). la necesidad de desestimar la presentación de aspiraciones económicas que contraríen los postulados de buena fe y lealtad procesal que fundaron la legislación adjetiva, como en efecto, lo ha compartido la homóloga constitucional (Cfr. C-157-2013), y ii). la función procesal de determinar el valor de las pretensiones en los casos que la ley lo permite.*”. Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. STC7646-2021.

puede abstenerse de decretar la práctica de pruebas, para lo que ha de atenerse a los principios de pertinencia, conducencia y utilidad⁹ probatoria, sin que con ello se esté afectando el acceso a la administración de justicia, menos los derechos a la defensa y contradicción, propios del debido proceso (artículos 29 y 229 Constitucionales).

En cuanto a costas, no habrá condena ya que no se advierte su causación (art. 365.8 procesal civil).

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, según se motivó.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Sin costas.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO

⁹ Sobre tales conceptos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “*Los medios suasorios aducidos han de ser i) lícitos, ii) conducentes, iii) pertinentes y iv) útiles en relación con la controversia en la que se invocan, esto es, i) que no estén prohibidos o se hayan obtenido con violación de derechos fundamentales, ii) que sean idóneos legalmente para demostrar determinado hecho, iii) que guarden relación con los supuestos fácticos que se pretende demostrar y los que originaron la polémica, y iv) que sean necesarios para esclarecer el debate.*”. STC14244-2021.